

RESEÑA

Samuel Moyn. *Not Enough: Human Rights in an Unequal World*. Cambridge, MA: The Belknap Press of Harvard University Press, 2019. US\$20 (ISBN: 9780674737563), 277 pp.

Robinson Lobos, Universidad Adolfo Ibáñez, Chile

Entre la abundante literatura sobre derechos humanos reciente, ha surgido últimamente una corriente de investigaciones historiográficas denominada ‘revisionista’, que incluye a autores como Stefan-Ludwig Hoffmann (2016), Mark Mazower (2009) o Samuel Moyn, autor del libro reseñado. Moyn ha desarrollado una prolífica obra en torno a la historia de los derechos humanos (Moyn 2014a, 2014b, 2015), siendo en particular *The Last Utopia* (2010) la obra principal de esta corriente y un referente contemporáneo en la materia.

Moyn sostiene que los derechos humanos, tal como los entendemos hoy en día, como derechos individuales concedidos a toda persona en toda nación, corresponden a una interpretación surgida recién a fines de la década de 1970. Si esto es así, entonces existiría una correlación entre el período de desarrollo de los derechos humanos, y su interpretación individualista, la expansión del neoliberalismo a nivel global y el progresivo dismantelamiento del Estado de Bienestar. En *Not Enough*, Moyn se pregunta si los derechos humanos pueden ser entendidos como el lenguaje normativo del neoliberalismo.

El autor intenta resolver la aparente paradoja que implica que el discurso normativo por excelencia del siglo XXI sea afín al neoliberalismo, abordando la historia a nivel global de los derechos más afectados a causa de la expansión del neoliberalismo: los derechos económicos y sociales. Moyn rastrea los cambios en la interpretación de estos

derechos, igualitarista desde fines de la Segunda Guerra Mundial hasta que, a mediados de la década de 1970, fueron concebidos de acuerdo al principio de suficiencia (Frankfurt 1987), tornándolos “no amenazantes para el movimiento neoliberal” (Moyn 2019, xii).

El primer capítulo de *Not Enough: Human Rights in an Unequal World* indaga en el origen del principio igualitarista en el contexto de la Revolución Francesa. La facción jacobina demandaba no solo la moderación de los extremos de riqueza y pobreza, para evitar los males de la división interna de la sociedad, sino más bien una igualdad material. Durante el siglo XIX se interrumpe la pretensión igualitarista por la primacía que adquieren los proyectos revolucionarios y el discurso de las sociedades liberales europeas. Los gobiernos liberales respondieron garantizando algunos mínimos sociales, principalmente estándares laborales y algunas necesidades mínimas. Solo a fines de ese siglo, con la agudización de la cuestión social y la crisis de las democracias liberales, se posibilita la consagración constitucional de derechos sociales y económicos.

La pretensión igualitarista surgirá con fuerza a inicios del siglo XX. Moyn observa, en los trabajos de sociólogos como H. Lasky, G. Gurvitch o T.H. Marshall, y de historiadores como K. Polanyi, una justificación para la implementación progresiva de un Estado de Bienestar, de la mano de la ampliación de los derechos de ciudadanía y de una serie de cambios jurídicos que expanden la acción estatal hacia áreas del derecho privado. A nivel nacional, los derechos sociales operaban como una salvaguardia ante conflictos sociales exacerbados por la creciente desigualdad producida por el régimen capitalista.

La existencia del Estados de Bienestar explica la inclusión de derechos sociales en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) en 1948. Moyn considera la DUDH como una legitimación de la evolución del Estado de Bienestar a nivel internacional. Ciertamente, DUDH involucra derechos políticos y civiles, pero su característica central radica en la inclusión de derechos sociales y económicos, representando un compromiso con condiciones de justicia distributiva nacionales.

Pese a ello, su efecto inicial fue tangencial. En primer lugar, la DUDH no se refería explícitamente a la igualdad distributiva sino a ‘un ideal común’ por el cual ‘esforzarse’. En segundo lugar, la DUDH y la

Carta de las Naciones Unidas fueron diseñadas para mantener el régimen colonial bajo unas coordenadas similares a las ya existentes en la Liga de las Naciones, bajo el sistema de administración fiduciaria. En el caso de los derechos sociales, el problema colonial se manifestaba en evitar que estos derechos (y en particular los derechos laborales) se hicieran extensivos a los súbditos de los imperios en las colonias.

Para Moyn, son los movimientos poscoloniales los que, al liberarse de los imperios europeos, expanden la demanda normativa de la igualdad material, no solo en el sentido de que los ciudadanos de los nuevos Estados poscoloniales fueran sujetos de iguales derechos, sino asimismo aspiran a que las relaciones entre Estados se organicen igualitariamente. Los movimientos poscoloniales vinculan la idea de soberanía política y la autodeterminación de los pueblos con el fin de la desigualdad global.

La ola poscolonial llega a la ONU reflejando su creciente ascendencia en la promulgación en 1966 de los dos principales tratados de derechos humanos: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). El derecho de autodeterminación de los pueblos abre ambos tratados, siendo concebido como el más relevante por parte de los Estados poscoloniales, pues permite la creación de naciones dotadas de soberanía, en las cuales se pueden definir e implementar los restantes derechos civiles, políticos y económicos. La autodeterminación posee además una dimensión económica, que declara que los pueblos tienen soberanía permanente sobre sus recursos naturales. Ello “permitió a los nuevos estados poner fin a un legado del imperialismo basado en concesiones, y llevó a varias expropiaciones, declarando nulos contratos que impedían a los países enriquecerse con los productos que se encontraban en sus territorios” (Moyn 2019, 110-111).

La demanda igualitarista global, el intento de establecer estructuras distributivas entre naciones, fue representada por el Nuevo Orden Económico Internacional (NOEI). La forma política de este proyecto fue una versión del socialismo que, a diferencia del socialismo soviético, se orientaba más al ámbito internacional que al doméstico.

El foco del NOEI se encontraba en la justicia distributiva de las relaciones entre Estados (especialmente entre el norte y el sur), y no en el

ámbito interno entre ciudadanos de cada país (dejaba estructuras locales de dominación intactas). Esto marcó la decadencia del movimiento poscolonial, a la luz de su tendencia a sostener gobiernos autoritarios que violaban otros derechos humanos.¹

A partir de la década de 1970, Moyn observa un cambio en la concepción de los derechos humanos, que los lleva a su forma contemporánea: ya no serán interpretados en términos de igualdad material entre naciones, sino como derechos individuales que se satisfacen asegurando condiciones mínimas de subsistencia.

Durante esta década, la violación de los derechos humanos por parte de gobiernos autoritarios en Latinoamérica y Europa Oriental hará que la atención se centre en derechos políticos y no en económicos o sociales. Esto tiene como correlato institucional la fundación de Amnistía Internacional y de Human Rights Watch, centradas en la protección de los derechos políticos, denunciando torturas y encarcelamientos ilegales, entre otras violencias autoritarias, pero que dejan explícitamente de lado la realización de derechos sociales y económicos.

Conjuntamente, el surgimiento del paradigma de las necesidades básicas (NB) permite redefinir la cuestión de la justicia material, abandonando el marco del Estado de Bienestar que determinaba la interpretación de los derechos humanos desde la DUDH. La cuestión de los derechos sociales y económicos será leída en términos de mínimos necesarios, como una ética global para la subsistencia. Las NB “fijan un mínimo absoluto de bienes y servicios esenciales que tendrían la virtud de una aplicación universal y fácil medición” (Moyn 2019, 130).

Este enfoque se expandió globalmente gracias a su apropiación por parte del Banco Mundial (BM), bajo la dirección de Robert McNamara (1968-1982), y gracias a economistas como Paul Streeten o Amartya Sen, transformando el alivio de la pobreza en un proyecto mucho más urgente y realista que la incierta modernización del tercer mundo y su liberación colectiva.

Moyn observa una inversión en las premisas que guían el discurso normativo de los derechos humanos. Mientras las propuestas del NOEI se centraban en la idea de igualdad material entre pueblos y naciones (colectivamente entendida), el enfoque de las NB se caracteriza por un

¹ Un análisis historiográfico reciente del auge y caída de los movimientos poscoloniales se encuentra en Getachew (2019).

tratamiento economicista del problema de los mínimos necesarios para la subsistencia, definida en términos individuales, al interior de cada país.

Estos cambios en el contexto político mundial tienen su repercusión en la filosofía moral, con la creación de teorías sobre la ‘justicia global’, entendida como intereses individuales que pueden ser defendidos en términos de derechos. Charles Beitz (1999 [1979]) se manifestaba contrario a la pretensión igualitarista a nivel global y en particular contra las implicancias de una lucha contra el colonialismo en nombre del principio colectivo de autodeterminación. Son intereses de individuos y no de pueblos los que se defienden en términos de justicia. Los últimos solo son justos en la medida en que representan los intereses de los primeros.

El discurso normativo global abandonó las premisas igualitaristas fundadas en actores colectivos nacionales, privilegiando garantías de subsistencias individuales. Se produce, por tanto, una intersección entre los derechos humanos y las fuerzas expansivas de la globalización económica, al mismo tiempo que comienza el declive del Estado de Bienestar y el fin de los proyectos poscoloniales. La justicia global y la globalización de los mercados “se volvieron compañeros en su camino al presente” (Moyn 2019, 172).

El último capítulo del libro intenta desentrañar la respuesta a la pregunta inicial del texto: si acaso los derechos humanos son el discurso normativo del neoliberalismo o, más bien, su expansión coincide contingentemente con la del neoliberalismo.

Para Moyn, los derechos humanos no son la legitimación del neoliberalismo, sino que producen un desplazamiento de la atención de los problemas de la igualdad material y, con su crítica a los regímenes comunistas de Europa del Este, contribuyen a un ‘desencantamiento’ respecto del socialismo. El socialismo iría abandonando la escena, dejando el espacio libre para la expansión global de los mercados y para unos derechos humanos entendidos en términos individuales. Las oleadas a favor del mercado global no se encontraron con una alternativa en términos igualitaristas. En Latinoamérica, los procesos de democratización se habrían asociado a la garantía de derechos humanos, pero sin dar cuenta de los efectos de la desigualdad a causa de la expansión de los mercados.

El autor considera que las instituciones financieras globales como el BM y IMF tuvieron un rol clave en este contexto, mediante políticas de préstamos a Estados, generando graves endeudamientos que fueron acompañados de ‘ajustes estructurales’. Ninguna de estas instituciones realizaba préstamos considerando si los Estados firmantes respetaban los derechos humanos (políticos o sociales). Puede objetársele a Samuel Moyn no considerar un análisis de las formas jurídicas de derecho internacional que adquieren estas políticas, las cuales les permiten abstraerse de las exigencias de derechos humanos o de la interacción entre cuerpos del derecho internacional y los derechos humanos, particularmente en el ámbito de las inversiones de empresas transnacionales (Anghie 2004).

Not Enough es un libro erudito en el manejo de fuentes y estimulador en sus propuestas. Nos provee de una mirada de los derechos humanos que se aleja de los derechos naturales y de la idea del sufrimiento como impulsora de la evolución de los derechos humanos (Lauren 2011; Hunt 2007). Moyn sitúa la clave interpretativa de los derechos humanos en una tensión entre los principios de suficiencia e igualdad. El autor pone la atención en cómo la profundización de la desigualdad material ha creado incentivos permanentes para migraciones, crisis de refugiados y surgimientos de populismos. Nos recuerda, además, cómo la consagración de los derechos sociales y económicos fue una respuesta histórica a los conflictos sociales exacerbados por las dinámicas del mercado.

BIBLIOGRAFÍA

- Anghie, A. 2004. *Imperialism, Sovereignty and the Making of International Law*. New York: Cambridge University Press.
- Beitz, C. 1999 [1979]. *Political Theory and International Relations*. Princeton: Princeton University Press.
- Frankfurt, H. 1987. Equality as a Moral Ideal. *Ethics* 98(1), 21-43.
- Getachew, A. 2019. *Worldmaking after Empire. The Rise and Fall of Self-Determination*. Princeton: Princeton University Press.
- Hoffmann, S.L. 2016. Human Rights and History. *Past & Present* 232(1), 279-310.
- Hunt, L. 2007. *Inventing Human Rights*. New York: Norton & Company.
- Lauren, P.G. 2011. *The Evolution of International Human Rights*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.

- Mazower, M. 2009. *No Enchanted Palace. The End of Empire and the Ideological Origins of United Nations*. New Jersey: Princeton University Press.
- Moyn, S. 2010. *The Last Utopia. Human Rights in History*. London: The Belknap Press of Harvard University Press.
- Moyn, S. 2014a. *Human Rights and the Uses of History*. London: Verso Books.
- Moyn, S. 2014b. The Return of the Prodigal (1-14). En Eckel, J. y Moyn, S. (eds.), *The Breakthrough*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
- Moyn, S. 2015. *Christian Human Rights*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press. *EP*